



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Juan Esteban Echeverry Álvarez
DEMANDADOS	Logytech Mobile S.A.S. Serviola S.A.S
RADICADO	05-001-31-05-002-2018-00404
TEMA	Reajuste de liquidación, indemnización por despido, sanción moratoria.
DECISIÓN	Confirma sentencia

El veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el **ACTA 102** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **JUAN ESTEBAN ECHEVERRY ÁLVAREZ** contra **LOGYTECH MOBILE S.A.S.** y **SERVIOLA S.A.S.**, con radicado **05-001-31-05-002-2018-00404**.

• **HECHOS:**

El demandante señaló como supuestos fácticos de la acción, en síntesis: que a una oferta laboral ofrecida en la ciudad de Medellín por la empresa Logytech Mobile S.A.S, donde surtió un proceso de selección. Que esta empresa tiene como objeto social la prestación de servicios logísticos a grandes superficies, distribución, transporte, bodegaje legalización, logística, venta, importación, exportación, almacenamiento y comercialización de bienes y servicios entre otras actividades. Que una vez fue seleccionado por dicha empresa, firmó contrato individual de trabajo con la empresa de servicios temporales Serviola S A., situación que todo el proceso de selección no se le indicó, es decir, que no iba a ser contratado directamente por Logytech Mobile S.A.S. sino a través de una empresa de servicios temporales. Que fue enviado por Serviola S.A.S.

a desempeñar el cargo de Administrador Centro de Experiencia a la empresa Logitech Mobile S.A.S. el 27 de marzo de 2015. Afirmó que inició labores con esta última en la fecha mencionada, pero aparece firmado el contrato individual de trabajo en misión el 30 de marzo de 2015. Que igual situación ocurrió con un documento denominado OTROSI AL CONTRATO DE TRABAJO, esto es, que supuestamente se firmó después del contrato, pero tiene la misma fecha de inicio de labores el 27 de marzo de 2015, sin embargo es aparentemente una adición al contrato, pero este tiene fecha del 30 de marzo de 2015. Que las funciones que desarrolló al servicio de la empresa usuaria fueron: Manejo de personal (17 personas), capacitación del personal, realización de informes, selección de personal, seguimiento y control de caja menor, cumplimiento de presupuesto comercial, cumplimiento de indicadores técnicos, control de inventarios y en esta función tenía el control de 2 bodegueros en el ejercicio de sus funciones, entre otras funciones. Su salario mensual era de \$2.093.000 como sueldo básico mas \$500.000 por concepto de comisiones por ventas y por servicio técnico. Que no le fue entregado copia del Reglamento Interno de Trabajo, ni se le puso en conocimiento el mismo. Que no fue capacitado para el cargo. Que con ocasión de la pérdida de un teléfono celular, se inició una investigación en su contra y también frente a dos almacenistas. Que fue sometido a prueba de polígrafo. Que vulnerándole su derecho de defensa fue despedido, con el argumento que no había pasado la prueba de polígrafo. Que la liquidación definitiva de prestaciones sociales le fue cancelada 7 días después del despido. Dicha liquidación no le fue pagada de forma completa, tampoco se le pagó indemnización por despido, se le hizo una retención ilegal de \$101.175. Que el 26 de junio de 2015 la empresa Serviola S.A.S. hace una reliquidación de las prestaciones sociales, la cual calculó en \$203.250; sin embargo, ese dinero nunca le fue pagado.

- **PRETENSIONES:**

Aspira el demandante se declare que con la empresa Serviola S.A.S., en calidad de empresa de servicios temporales y como tercera en la contratación, se llevó a cabo un contrato individual de trabajo a término indefinido entre el 27 de marzo al 17 de junio de 2015 para desarrollar el cargo de Administrador Centro de Experiencia en la empresa Logitech Mobile S.A.S. a la que fue enviado en calidad de trabajador en misión. Como consecuencia, se condene

a las demandadas de manera conjunta o separada, de manera solidaria o individual a reconocer y pagar el reajuste de la liquidación definitiva de salarios y prestaciones sociales al momento del despido en la suma de \$101.175, la indemnización por despido unilateral, ilegal e injusto, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, la sanción moratoria del artículo 65 del C.S.T., por la mora en pagar los salarios y prestaciones sociales al momento del despido y por la deficitaria liquidación de las mismas, hasta el momento del pago a razón de un día de salario por cada día de mora, la indexación de las condenas.

- **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:**

i) **Serviola S.A.S.:** Aceptó la pretensión primero, pero se opuso a la prosperidad de las demás. Aceptó la remuneración por salario básico, no así por comisiones. Como excepciones de mérito propuso las que denominó falta de causa para pedir, buena fe, pago y prescripción.

ii) **Logytech Mobile S.A.S.:** Se opuso a la totalidad de las pretensiones. Como excepciones de mérito propuso las de inexistencia de las obligaciones que se pretenden deducir en juicio, cobro de lo no debido, pago, buena fe, compensación y prescripción.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 2 de julio de 2019, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín condenó a Serviola S.A.S. a reconocer y pagar al demandante la suma de \$418.600 por concepto de indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, suma que deberá ser indexada al momento del pago. Absolvió de las demás súplicas de la demanda. Las costas procesales las impuso a cargo de la sociedad condenada.

- **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue recurrida en apelación por las partes, en los siguientes términos:

i) **Demandante:**

(...)

Discrepa con la conclusión a la que llega el despacho con respecto al reajuste prestacional, pues este hace acopio de la reclamación elevada en la demanda con respecto a que se encontró una diferencia en la liquidación de prestaciones sociales que hizo la empresa demandada en su momento de \$101.165 y que posteriormente la misma empresa la recalculó en un valor de \$203.250, en el despacho hubo una confusión entendiendo que esa plata se le pagó al demandante y es una confusión porque cuando la apoderada de la empresa Logytech interrogó al demandante, las preguntas surgieron de la documental de folios 105, 106 y concretamente folio 108 cuando se le pregunta si le hicieron la reliquidación o ajuste de prestaciones y el accionante dice que sí y que si le dieron orden de pago de conformidad con el documento que obraba en el expediente, él dice que sí, pero que no recuerda la fecha. Si se observa las pruebas documentales que aporta Logytech, en el folio 105 tienen un documento contable interno denominado orden de pago, después de haber encontrado el tema de la liquidación de prestaciones autorizan ese pago por un valor de \$2.274.540 y tiene un sello de tesorería. Es decir, no cabe duda que este documento que ordena el pago es interno. A folio 106 está el soporte de la consignación que se hace en Bancolombia en la cuenta del actor el 24 de junio de 2015 por un valor de \$2.274.540, sobre este aspecto no hay ninguna duda. La duda es que cuando la entidad –Serviola en este caso- encuentra que hay un desajuste o que hay una mala liquidación en las prestaciones sociales, evidentemente reliquida esas prestaciones y encuentra que hay una diferencia a favor del demandante de \$203.250, que es el valor que está en el folio 108 también como orden de pago, es decir, lo que hay es una orden de pagar y a esto se hizo referencia en el interrogatorio. Sin embargo, lo que brilla por su ausencia es el soporte de consignación, el cual se insiste desde la presentación de la demanda en el hecho número 15. Y se señala que se hizo la reliquidación, que se hizo el documento, que se hizo orden de pago, pero no se pagó. Y aunque la parte demandada se queja que posiblemente no se refleja en el documento que aprueba esta parte el cual es el extracto de cuenta bancaria, posiblemente pudo haber sido porque para el momento en que se emitió, el pago no se había hecho. Pero en todo caso, al que le corresponde probar el pago, es al que lo debe. Y causa curiosidad porque en el pago de \$2.274.540 si trajeron la orden de pago y el recibo de consignación y en el del reajuste no trajeron el recibo de consignación. Es porque no se ha hecho. En ese orden de ideas, la conclusión a la que llega el despacho de pago, con esta documental, está fuera de la realidad porque aquí no hay prueba de pago. Ahora, si había existido alguna duda o algún inconveniente por parte del despacho, debió haber pedido la prueba. Le solicito a la Sala Laboral que revoque la negativa del despacho de conceder el reajuste prestacional con soporte en que en el plenario hay prueba de pago. lo anterior, porque prueba de pago no hay.

En lo que tiene que ver con la indemnización moratoria, se encuentra conforme con el análisis del despacho frente a este concepto y no presenta recurso con relación a esto.

En lo que tiene que ver con la indemnización de despido, el despacho arriba a la conclusión que no hay lugar a la misma porque evidentemente lo que operó en el presente caso, como lo avanzó el apoderado de Serviola, era que había una causa de orden legal para la terminación de este contrato y no una causa de justificación injusta. El despacho llega a esta conclusión porque no se discutió si era por aumento de mercancía o producción. Eso no es cierto, dentro de las respuestas que profiere Logytech, incluso parece que, de manera hábil, interpreta la redacción del decreto 4369 de 2006 en el artículo 6 que es el que justifica en los contratos por obra o labor, la contratación de personal y el numeral 3 de este mismo artículo que es el que interesa (...) En toda la defensa que hace la empresa, se desdibuja la autorización de orden legal, porque si se observa el contrato firmado por el actor dice que la labor contratada es la prestación del servicio para atender incrementos parte administrativa. Esa es una situación que escapa de la órbita que regula el decreto 4369, porque lo que permite la norma es para el incremento de producción, ventas, etc. Entonces, la interpretación que tratan de manipular es confundir parte administrativa con parte de producción y esa es la situación que desde el principio se planteó como desconocimiento de la naturaleza contractual cuando se solicitó

que se entendiera que entre las partes lo que ocurrió fue un contrato a término indefinido, cuando la contratación está desdibujada por la realidad, simplemente el contrato muta del nombre que se le dio, al contrato realidad. Y la Corte Suprema ha dicho que cuando la naturaleza contractual no es clara, el contrato se entiende a término indefinido, como en la sentencia con radicado 69175 del 2018, en este sentido, al demandante se contrató como administrador y esa función no se acabó cuando a él lo despidieron y el hecho de haber traído a discusión, otras personas que se despidieron, hay que decir que esas personas no fueron compañeros del demandante y ni siquiera trabajaban en Medellín y no sabemos qué tipo de contratación tenían. Solicita que revoque la sentencia en este sentido, que el contrato lo entienda y lo declare indefinido como se pidió en la demanda y que de él se desprenda la indemnización correspondiente de conformidad con el cargo y salario que quedaron demostrados, calculándolo en el valor que corresponda (...)

ii) Serviola S.A.S.:

(...)
Apela en cuanto a la condena impuesta a su representada a pagar 6 días de retraso en el pago de la liquidación final para un total de \$418.600 y por ende también a la condena de pagar las costas del proceso. Considera que no hay lugar a esa indemnización moratoria porque como lo ha dicho la jurisprudencia, en caso de que este derecho indemnizatorio sea reclamado por la vía judicial, la jurisprudencia ha precisado que el juzgador no debe proferir condena automática ante el hecho de la falta de pago, sino que ha de examinar la conducta patronal y si de esta emerge la buena fe, exonerar al patrón. En este caso, la buena fe está acreditada máxime con el pago de la reliquidación, o sea, aquí hubo un pago oportuno, dentro del plazo legal, no hubo ningún retraso ni mala fe. En este sentido, considera que no hay lugar a concepto alguno por indemnización moratoria y que debe tenerse en cuenta la buena fe, porque no está acreditado lo contrario. Al respecto, está clara la confesión del demandante puesto que en el interrogatorio se le preguntó de forma precisa sobre la cuenta corriente que tenía y si en esa cuenta corriente le consignaron el valor de la liquidación inicial, a lo cual dijo que sí. Y también se le preguntó si el día 1º de julio de 2015 en esa misma cuenta le pagaron la suma de \$203.600 por concepto de reliquidación, a lo que el demandante respondió que sí, pero que no recordaba la fecha. El señor juez le precisó si la había recibido y él dijo que sí. No hay ninguna confusión, porque al demandante no se le preguntó nada sobre el documento que ahora alude la parte actora que es que se confundió con la orden de pago. El demandante no negó que haya recibido el pago. Solicita se revoque únicamente lo referente a la indemnización moratoria que consideró el despacho porque hubo buena fe. También que se revoquen las costas puesto que se debía absolver en un todo a su representada. (...)

• **ALEGATOS:**

i) Logytech Mobile S.A.S.:

(...) jamás existió un vínculo de naturaleza laboral ni de ninguna índole porque el Demandante fue contratado por una la Empresa de Servicios Temporales SERVIOLA S.A., para cumplir la labor contratada, circunscrito al marco legal que para el efecto señala la Ley 50 de 1990, por lo que jamás se adelantó a su favor ningún proceso de selección por parte de la LOGYTECH MOBILE S.A.S como temerariamente se pretende, circunstancias que al unísono ratificaron los testigos, por lo que no existe fundamento en la ley ni en los hechos que permitan acceder a la declaración reclamada, especialmente si se tiene en cuenta que la Empresa que represento no tiene sucursal en la ciudad de Medellín, como equívocamente lo afirmó el demandante.

También es necesario que se tenga en cuenta que el accionante únicamente prestó servicios como trabajador en misión durante menos de 6 meses, lo que evidencia la ausencia de extralimitación en el término de contratación.

(...)

S.A. se limitó a las posibilidades de provisión de servicios temporales descrita en la Ley, con ocasión al cual se vinculó al accionante como trabajador en misión, actividad totalmente legal y legítima, lo que corrobora que la EST fue su único empleador y no mi Representada como erradamente se pretende por lo que no puede considerarse a la EST como simple intermediario en la contratación laboral a fin de que sea la empresa usuaria quien adquiera la calidad de verdadero empleador, principalmente si se tiene en cuenta que SERVIOLA S.A. funcionó lícitamente y su actividad fue autorizada por el Ministerio del Trabajo de conformidad a lo señalado en el artículo 82 de la Ley 50 de 1990, lo que impide que pueda catalogársele como un empleador aparente y verdadero intermediario que ocultó su calidad en los términos del artículo 35 del Código Sustantivo de Trabajo, para tener a mi Representada como usuario ficticio y verdadero empleador de la accionante.

(...)

Se demostró en el proceso que mi Representada únicamente ejerció hacía el demandante la facultad subordinante delegada en virtud del contrato de prestación de servicios suscrito con la Temporal, sin embargo, las restantes facultades y obligaciones de Ley, estuvieron a cargo del verdadero y único Empleador, esto es, SERVIOLA, esclareciéndose sobradamente en el debate probatorio la ausencia de una relación de índole laboral entre el accionante y mi Representada.

(...)

ii) Serviola S.A.S.:

(...)

presento a los Honorables Magistrados este escrito de alegación en procura de obtener que se revoque la sentencia en cuanto se condena a SERVIOLA al pago de indemnización moratoria por \$418.600 y al pago de costas del proceso y, en su lugar, se le absuelva de dichos cargos.

En los puntos restantes, esto es, en cuanto se absuelve a mi representada de las demás pretensiones formuladas en la demanda, les solicito se confirme la sentencia toda vez que es ajustada a derecho y a lo visto en el proceso.

Me reitero en lo expuesto al sustentar el Recurso de Apelacion en cuanto a que debe tenerse en cuenta la actuación de buena fe de la empresa en el pago de la liquidación y reliquidación de las prestaciones sociales en un termino minimo de tiempo, habida cuenta además de los días no laborables que en ese lapso transcurrieron, por lo que considera mi representada no hay lugar a condena por indemnización moratoria ni por ende, al pago de costas del proceso.

De otro lado, con relacion a las razones expuestas en la apelación formulada por la parte actora, con el mismo respeto, insisto en que no le asiste razón al apoderado del demandante en sus alegaciones cuando ataca la sentencia proferida.

La sentencia esta debidamente motivada, analizada en detalle la prueba recaudada y muy precisamente la prueba de confesión, elementos probatorios que llevan al Señor Juez a concluir que no hay lugar a los cargos que se impetran en la demanda.

No resulta valido ni procedente que el apoderado del demandante trate de desvirtuar la confesión que hizo el señor ECHEVERRY ALVAREZ sobre el pago de la reliquidación de sus prestaciones sociales.

El señor ECHEVERRY ALVAREZ reconoció en forma honesta y precisa, que si recibió el pago de la reliquidación y solo anotó no recordar la fecha, pero contestó claramente ante la pregunta concisa que se le formuló, que si recibió dicho valor por la reliquidación.

La intervención del apoderado, después de absuelto el interrogatorio, no resulta válida y no puede decirse de confusión del Señor Juez, cuando lo que se está haciendo con dicha intervención es tratar de confundir la situación para, insisto, tratar de desvirtuar la prueba reina que es la propia confesión del demandante al reconocer que si recibió ese valor de \$203.250 por concepto de reliquidación de prestaciones sociales.

Con el debido respeto, al tiempo de los Honorables Magistrados, los remito a lo expuesto por la suscrita sobre este punto, en la alegación final y al sustentar el Recurso de Apelación, en los cuales se hizo el análisis preciso de esta prueba y la infundada controversia que a posteriori pretende crear el apoderado de la parte actora.

No le asiste razón tampoco a la parte actora en cuanto se refiere a la modalidad y terminación del contrato de trabajo. El contrato está celebrado entre SERVIOLA empresa de servicios temporales y el demandante para ser enviado en misión a Logitec, mientras dure la obra o labor contratada, esto es, por el tiempo que la usuaria lo requiera y cumplida esta condición se termina el contrato. Así lo conozco y convino el demandante al suscribir dicho documento y así quedó demostrado en el proceso.

Es obvio que el incremento en producción, en ventas y en los demás ítems que cita el apoderado del actor, implican, claro está, incremento en las labores de administración. Es que se trata de un engranaje empresarial de producción, ventas, repartos y demás labores anexas y complementarias que conlleva un aumento en la gestión administrativa. No puede pensarse en un aumento de producción y ventas en forma aislada. Se requiere lógicamente de gestiones operativas y administrativas concatenadas para que el rendimiento se logre.

Aduce el apoderado otros aspectos, que como lo dijo el Señor Juez, no fueron demostrados en el proceso por la parte actora, como lo referente a otras supuestas causas de terminación del contrato y de un supuesto reemplazo y pretende desconocer lo probado en debida forma por mi representada sobre el hecho de la terminación de otros contratos en misión por la misma circunstancia, como consta en los listados que se anexaron con la contestación de la demanda y que no fueron objeto de tacha o reparo alguno por la parte actora dentro del término legal posterior a la presentación de dicha contestación.

Con lo expuesto, Señores Magistrados, les solicito se desestimen los argumentos de la apelación del demandante y se mantenga la decisión absolutoria para mi representada por cuanto, insisto, la decisión del Señor Juez está debidamente fundamentada y corresponde precisamente a lo establecido en el proceso, con la prueba documental y muy precisamente con la confesión del demandante al absolver los interrogatorios de parte que se le formularon en su oportunidad.

Finalmente, reitero la solicitud para que revoque la sentencia únicamente en cuanto se condena a mi representada al pago de indemnización moratoria y costas del proceso y se confirme en cuanto se le absuelve de los restantes conceptos demandados.

(...)

- **DECRETO 806 DE 2020:** Atendiendo a lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio

de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

CONSIDERACIONES:

Teniendo en cuenta que las partes recurrieron en apelación la sentencia de instancia, resulta claro que el Tribunal apenas tiene competencia para revisar los puntos de inconformidad expuestos por los mandatarios judiciales atendiendo a lo dispuesto en los artículos 66 y 66A del Código Procesal Trabajo y de la Seguridad Social.

Con base en la apelación formulada contra a sentencia, el problema jurídico a resolver se centrará a los siguientes temas *i)* procedencia del reajuste de la liquidación definitiva del contrato; *ii)* indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; *iii)* indemnización por despido injusto; y, *iv)* costas procesales.

i) Reajuste de liquidación

Alega el demandante que la demandada recalculó el valor a pagar por prestaciones en la suma de \$203.250; sin embargo, en el expediente no milita prueba de dicho pago. El juzgado del conocimiento concluyó que tal suma fue efectivamente pagada al actor, conforme se desprende de la prueba documental allegada al expediente.

Atendiendo a las reglas de la sana crítica, la libre formación del convencimiento y la valoración probatoria de que trata el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en las que el operador judicial tiene la facultad de libre apreciación y ponderación probatoria y con base en ello, inclinarse por los medios demostrativos que le briden convicción, para esta Sala se encuentra probado el pago por valor de \$203.250. Si bien, conforme lo advierte el mandatario judicial del demandante en su apelación, la prueba documental en relación a la consignación de este dinero no es clara, pues no se observa que efectivamente se hubiere realizado la misma y que la confesión hecha fue afirmar que sí le dieron orden de pago de conformidad con el documento que obraba en el expediente, pero contrario a lo anterior, fue el

mismo demandante quien confesó haber recibido este dinero, pues así lo manifestó claramente ante las preguntas que le realizará la mandataria judicial de Serviola S.A.S. y el juez¹. Expresamente manifestó haber recibido la suma de \$203.250, sin que recordara la fecha de dicho pago. Como consecuencia, en este sentido se **CONFIRMARÁ** la sentencia absolutoria.

ii) Indemnización moratoria

El a quo condenó al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, al considerar que se dio una tardanza injustificada de seis (6) días por parte de Serviola S.A.S. en el pago de la liquidación definitiva a favor del demandante. Por su parte, esta última recurrió en apelación la sentencia indicando que debe ser absuelta de tal condena, pues esta no opera de forma automática, que en su lugar, el juez debe de examinar la conducta patronal y si de esta emerge la buena fe, exonerar al empleador.

Con relación a la aludida indemnización, ha indicado la Sala que por tratarse de una disposición de naturaleza eminentemente sancionadora su imposición no procede de manera automática, sino que debe analizar las razones por las cuales el empleador incumplió con sus obligaciones, presumiéndose en todo caso, la buena fe, como principio constitución y en ese caso la imposición de la sanción solo procede si se acredita que el actuar estuvo prevalido de una intención fraudulenta.

A folios 103 del expediente milita escrito de terminación de contrato de trabajo, en el que se lee que Serviola S.A.S. da por finalizado el vínculo que lo unía con el señor ECHEVERRY ÁLVAREZ, a partir del miércoles 17 de junio de 2015. A folios 104 milita copia de la liquidación definitiva de prestaciones sociales, la cual fue pagada el miércoles 24 del mismo mes y año.

Pues bien, la liquidación definitiva de salarios y prestaciones debe realizarse una vez finalice el contrato de trabajo, pero pueden existir circunstancias justificables que impidan que tal pago se haga de manera oportuna; sin

¹ Respuesta que puede ser escuchada en el CD-ROM de folios 172. Audio “2018-0404 PRUEBAS” minuto 11’55

embargo, en el presente asunto, no se observa en parte alguna las justificaciones que ocasionaron la tardanza en el pago de la mencionada liquidación.

Que el pago de la liquidación se realizara una semana después de terminado el contrato de trabajo, no ubica al empleador en el campo de la buena fe; todo lo contrario, tal actitud omisiva, sin justificación demostrada, se considera de mala fe, pues una vez se le da aviso al trabajador que el vínculo le será terminado, la misma empresa debe poner a disposición inmediatamente de aquel el dinero que por ley le corresponde, suma de dinero que lo ayuda al sostenimiento mientras se encuentra cesante. Así las cosas, la sentencia se **CONFIRMARÁ** en este sentido.

iii) indemnización por despido injusto

Fueron absueltas las demandadas de la indemnización por despido injusto reclamada por el actor, al considerar que, por tratarse de un contrato por obra o labor determinada, una vez Logytech Mobile S.A.S. dejó de requerir los servicios del señor ECHEVERRY ÁLVAREZ, finalizaría la labor contratada por Serviola S.A.S. Apela la decisión el demandante, indicando que el contrato que unió a las partes fue a término indefinido y no por obra o labor, debido a que no se cumplieron las exigencias de que trata el decreto 4369 de 2006 para ser enviado en misión a la empresa usuaria. Añadió que se encuentra desdibujada la autorización de orden legal, toda vez que, el contrato firmado por el actor dice que la labor contratada es la prestación del servicio para atender incrementos parte administrativa y que tal situación escapa de la órbita que regula el decreto 4369 de 2006, ya que, lo que permite la norma es para el incremento de producción y ventas.

El decreto 4369 de 2016 (*Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales*), mismo que fue compilado en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, estipuló en el numeral 3º del artículo 6º, que los usuarios de las Empresas de Servicios Temporales sólo podrán contratar con estas en los siguientes casos: “3. *Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses más*”

La finalización del contrato de trabajo le fue comunicada al demandante por parte de Serviola S.A.S. mediante el documento visible a folios 103, denominado “Notificación de Retiro”. En este se lee: *“Atentamente no permitimos comunicarle que la labor para la cual fue contratado (a), finaliza el día 17 de junio del 2015 inclusive. Por lo tanto, la terminación y liquidación de su contrato se hará efectiva en la fecha antes mencionada”*

De conformidad con lo anterior, no comparte esta Sala la posición asumida por la parte actora de que el contrato que unió a las partes fue a término indefinido. Y es que, el incremento de producción y ventas no está limitado a los trabajadores directos de estos servicios, ya que también cubre al personal administrativo, como es el caso del demandante, quien ocupó el cargo de administrador de centro de experiencia. El objeto de la empresa de servicios temporales radica en el suministro de mano de obra con el fin de ponerla a disposición de un tercero; en el caso de autos Logytech Mobile S.A.S. como empresa usuaria, es quien determina las tareas a realizar y supervisa la ejecución de las mismas. Es considerado entonces como trabajador de la empresa de servicio temporal, pero la subordinación la ejerce la empresa usuaria; sin embargo, no se desprende de la normatividad en comento que exista alguna prohibición para que dicho trabajador no pueden ocupar cargos administrativos. Y es que, donde la norma no distingue no le corresponde distinguir el intérprete, por lo que se considera que la vinculación del señor ECHEVERRY ÁLVAREZ se dio con Serviola S.A.S. a través de un contrato por duración de la obra o labor, para desempeñarse en misión en Logytech Mobile S.A.S., contrato que rigió entre el 30 de marzo y el 17 de junio de 2015, sin que se supere con este el término de que trata el numeral 3º del artículo 6º del decreto 4369 de 2016.

iv) Costas procesales

Ha reiterado esta Sala del Tribunal en gran número de providencias que las costas procesales son una condena objetiva, la cual está a cargo de la parte vencida en juicio. Al proceder parcialmente las súplicas de la demanda, la condena en costas procesales de la primera instancia recae en la parte vencida, esto es, Serviola S.A.S.

En la segunda instancia, por no salir adelante la apelación formulada por las partes, no se impondrán costas procesales.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas por las demandadas.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Se **CONFIRMA** la sentencia que se revisa por vía de apelación de fecha y procedencia conocidas.

Las costas procesales quedan como se dejó dicho en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 073 del 30 de abril de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>